

## AGENDA CIUDADANA

### DE NUEVO LA MALA IMAGEN

Lorenzo Meyer

**Un Problema.-** A lo largo del siglo XX, la imagen internacional de México -de su gobierno, economía, sociedad y cultura- ha oscilado entre la excelencia por un lado y la deficiencia o de plano la imperfección congénita por el otro.

México fue visto desde fuera como paradigma de país en desarrollo durante el Porfiriato, el alemanismo o en los cinco primeros años del salinismo, y fue relegado a la categoría de sociedad sin salvación durante la Revolución, los primeros años de Calles o el cardenismo. Las etapas intermedias fueron generalmente vistas como afianzamiento de lo alcanzado -el ruizcortinismo- o marchas camino de la salvación -avilacamachismo, diazordacismo o delamadridismo- o de la destrucción -cheverrismo, lopezportillismo. El de hoy es un momento peculiar, pues la oscilación de la excelencia a la deficiencia se dio sin punto intermedio; ocurrió de pronto y dentro de un mismo sexenio: el de Carlos Salinas y en los primeros días del siguiente.

**El Péndulo.-** En su momento cumbre, el presidente Carlos Salinas y sus políticas de apoyo radical al capital externo, lograron que las fuentes principales de la opinión internacional -las ideas que sobre México dominaban en las cancillerías, en los círculos financieros, en la prensa y en los medios académicos e intelectuales extranjeros- aceptaran el discurso triunfalista del salinismo como el equivalente de la realidad. Sólo al desencadenarse los dramáticos acontecimientos de 1994 -desde la

rebelión indígena de Chiapas hasta la crisis económica pasando por los asesinatos políticos- el mundo externo finalmente tomó conciencia de las debilidades congénitas del salinismo y que por cinco años se había negado a ver.

A partir del estallido de la crisis económica de diciembre del año pasado - y quizá como consecuencia de la frustración que produce el autoengaño- el péndulo de la opinión externa se movió con celeridad hacia el extremo opuesto, hacia el negativo. Este cambio tiene hoy preocupados e irritados a los encargados de la política gubernamental, entre otras cosas porque el modelo económico que ellos diseñaron desde hace años y con el que siguen comprometidos, no puede funcionar, no es viable, sin una inyección masiva de capital y confianza externos, particularmente de los Estados Unidos.

Como ya se dijo, hubo mucho de autoengaño y complacencia en esa visión externa extraordinariamente positiva y optimista respecto de los jóvenes tecnócratas neoliberales mexicanos - capacidad profesional, de liderazgo y honradez- que dominó entre 1988 y 1993 en Estados Unidos, Europa occidental, Latinoamérica y Japón. Por sí y ante sí, sin ejercer un juicio crítico, la opinión externa dominante decidió que México era el adelantado de América Latina, el modelo que los países del sur deberían seguir. La reacción frente al desengaño ha sido fuerte y hoy estamos viviendo la resaca de lo que apenas en diciembre de 1993 era una alta ola de admiración.

Tras la rápida y espectacular caída de la fachada primermundista del salinismo, reaparecieron a la vista de todos

los problemas de siempre; problemas que en realidad nunca habían sido superados sino disfrazados: los de un subdesarrollo institucional profundo, que entre otras cosas, afecta negativamente los intereses económicos y políticos de los países centrales que comercian con México. Y la opinión internacional, particularmente la norteamericana, molesta por tener que rescatar a una economía a punto de quebrar, se ha vuelto muy dura con los herederos de Salinas y, de paso, de muchas otras cosas asociadas con México, como se supone que son la migración indocumentada, el narcotráfico, la destrucción de la ecología, la corrupción y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. En estas condiciones es comprensible que sea grande la mezcla de nerviosismo con irritación en el equipo que hoy está a cargo de manejar la crisis del postsalinismo. Por su parte, este equipo -cuyo fracaso histórico no ha disminuido en nada su arrogancia original- responde a veces con sumisión extraordinaria y en otras con actitudes desafiantes aunque sin base. Un buen ejemplo de esto último se encuentra en la comparecencia reciente del canciller ante miembros del legislativo en aquello que se conoce como glosa del informe presidencial.

**Incómodos.**- Entre las varias cosas que el canciller José Angel Gurría trató con los legisladores, estuvo la de una posible conexión entre un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea y una cláusula democrática que podría llevar a los europeos a verificar el carácter democrático de los gobiernos de los países con los que ellos comercian. El canciller, tajante, rechazó la posibilidad y afirmó: "Los mexicanos nos sentimos

profundamente incómodos de que alguien venga a decir cómo y cuándo debemos ser democráticos" (*La Jornada*, 13 de septiembre).

No es difícil compartir la incomodidad del canciller, pero no por las razones que él sugería en su discurso sino por otras muy distintas, opuestas. El problema de fondo no es que si desde el exterior se pusiera a prueba la supuesta naturaleza democrática del sistema político mexicano se lesionaría nuestra soberanía -el verdadero golpe a la soberanía se lo dio el gobierno de Ernesto Zedillo cuando, para salvarse, debió recurrir a un megapréstamo norteamericano muy condicionado-, sino a que México simplemente no pasaría la prueba. Pretender hoy que el sistema político mexicano es democrático es tan inútil como tapar al sol con un dedo. Y es justamente eso, la vergüenza y la frustración de no poder acceder a un estadio superior de vida política, lo que realmente incomoda en la actualidad a muchos mexicanos.

**Una Prueba de Democracia.**- Para ser justos en relación al problema de la naturaleza de nuestra vida política, debe de reconocerse que ya ha habido un cierto avance en el contradictorio y problemático camino de México rumbo al pluralismo político real: un avance hecho por la sociedad a pesar y en contra del gobierno.

Un indicador democrático positivo se tiene en el hecho de que hoy las elecciones nacionales y algunas de las locales, son ya efectivamente competidas. La competencia entre personalidades y programas es un requisito mínimo indispensable para que la elección tenga sentido democrático, y en México, por fin, hemos

superado el estadio de los candidatos únicos a la José López Portillo o de los candidatos opositores artificiales hechura del PRI. Igualmente debe reconocerse que ya hay ciertas elecciones, como las últimas de Guanajuato, donde la autoridad electoral no es un mero Instituto Federal Electoral presidido por un priísta confeso -Chuayffet o Nuñez- sino una barrera relativamente efectiva contra algunos de los tradicionales fraudes priístas: manipulación del padrón, funcionarios de casilla parciales, relleno de urnas, alteración de resultados, etcétera. Sin embargo, no todas las elecciones locales se llevan a cabo con competidores reales y sólo unos cuantos institutos electorales han logrado su independencia efectiva respecto del partido de Estado y el gobierno.

Frente a los indicadores de avance democrático están todavía los del estancamiento en el viejo y persistente autoritarismo. El ejemplo reciente más palmario de esto último, esta en la enorme desigualdad en los recursos de que disponen los partidos políticos para hacer proselitismo entre los votantes (y compra directa de votos). En las democracias reales y modernas, hay una legislación clara y minuciosa en relación a los orígenes del financiamiento de los partidos, a los montos que pueden usar en sus campañas, a los medios y condiciones en que los pueden usar, y hay un mecanismo efectivo para que los partidos den cuenta a una autoridad independiente de todos y cada uno de sus gastos. Nada de esto existe aún en México.

Como ya se vio en el caso de los documentos extraídos de los archivos del PRI de Tabasco y presentados por el PRD a la

Procuraduría General de la República, en la elección de gobernador de Roberto Madrazo, no hubo ni sombra de equidad y control de los dineros del partido de Estado. Como ya sabemos, el PRI tabasqueño gastó no los cuatro millones a los que tenía derecho por ley sino al menos 237 millones de nuevos pesos, equivalentes a 59 veces el límite legal y, en su momento, una suma superior a la que el presidente de Estados Unidos William Clinton gastó en toda su campaña electoral. Con recursos tan abundantes y tan fuera de toda proporción, el candidato del partido de Estado en Tabasco quizá pudo haber ganado efectivamente parte o incluso todos los votos que se le atribuyen (56%), -cosa que el estudio de Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti pone en duda- pero por esa misma razón su elección no fue de ninguna manera democrática y hoy el ejercicio cotidiano del poder en Tabasco carece de legitimidad sustantiva y es, en realidad, un gobierno *de facto*. Datos recientes permiten suponer que incluso en la elección reciente de Guanajuato que el PRI perdió, ese partido de Estado también rebaso su límite legal de gastos, (*Proceso*, 18 de septiembre).

Tabasco y Guanajuato, más la ya famosa cena de 1993 donde el presidente Salinas reunió a 25 grandes empresarios para extraerles a cada uno 25 millones de dólares para el PRI, permiten inferir que en el resto de las campañas del partido en el poder, incluidas las presidenciales, deben de haber seguido el mismo patrón de condiciones inequitativas en extremo, es decir, de competencias electorales antidemocráticas.

En su intervención el canciller también se mostró en desacuerdo con las acciones promovidas ante instancias internacionales por los partidos de oposición en defensa de los derechos humanos políticos -desde hace tiempo el PAN ha insistido en llevar a la OEA sus quejas sobre fraudes electorales-, pero resulta que en la actualidad la práctica internacional considera que la violación de los derechos humanos no se puede escudar en el principio de no intervención. En la "Declaración de Managua" de junio de 1993, por ejemplo, los estados miembros de la OEA - México incluido- se comprometieron a modernizar sus estructuras políticas para, entre otras cosas, dar plenas garantías a la oposición y promover una cultura democrática. Si la cancillería no desea que el PAN o el PRD lleguen a la OEA o al Parlamento Europeo, el mejor camino no es invocar el principio de no intervención sino presionar a gobiernos como los de Tabasco y Guerrero para que cumplan con las normas de conducta internacionales. Hoy la soberanía mexicana se defiende con el Estado de Derecho, castigando masacres como la de Guerrero o evitando fraudes como los de Tabasco o Yucatán.

**En Conclusión.-** Ni duda que hay razones de sobra para que los mexicanos nos sintamos profundamente incómodos cuando alguien viene a decirnos cómo y cuándo debemos ser democráticos. Pero desafortunadamente la incomodidad proviene del hecho de que ese alguien tendría razón.

